

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN



SALA LABORAL

Medellín, cuatro (4) de agosto de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Para representar a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones se le reconoce personería a la sociedad MUÑOZ Y ESCRUCERIA S.A.S. representada legalmente por la doctora Maricel Londoño Ricardo identificada con cédula de ciudadanía 29.105.874 y tarjeta profesional 191.351 del Consejo Superior de la Judicatura, quien además actúa como apoderada judicial inscrita en el certificado de Cámara de Comercio de dicha sociedad, y por sustitución de ésta se le reconoce personería a la doctora Kelly Yiseth Holguín Serna identificada con cédula de ciudadanía 1.128.435.487 y tarjeta profesional 238.479 del Consejo Superior de la Judicatura.

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA

La **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, conformada por los Magistrados Jaime Alberto Aristizábal Gómez quien actúa como ponente, John Jairo Acosta Pérez y Francisco Arango Torres, procede a dictar sentencia de segundo grado, dentro del proceso ordinario radicado con el número 05001 31 05 010 2016 01100 00, promovido por el señor **FABIÁN DE JESÚS ACEVEDO GRAJALES** en contra de la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, con la finalidad de revisar en consulta la sentencia emitida el 13 de septiembre de 2018 por el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de

Medellín en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 69 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

De conformidad con el numeral 1° del artículo 13 de la Ley 2213 de 13 de junio de 2022 “...Por medio de la cual se establece la vigencia permanente del Decreto Legislativo 806 de 2020 y se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia y se dictan otras disposiciones...” se toma la decisión correspondiente mediante providencia escrita número **153**, previamente discutida y aprobada por los integrantes de la Sala.

ANTECEDENTES

El señor Fabián de Jesús Acevedo Grajales demandó a la Administradora Colombiana de Pensiones Colpensiones pretendiendo el reconocimiento y pago de los siguientes conceptos: retroactivo pensional causado desde el 10 de diciembre de 2013, intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, indexación y costas del proceso.

Como fundamento de sus pretensiones se expuso, que medicina laboral de Colpensiones lo calificó con una pérdida de capacidad laboral del 66.3% de origen común, estructurada el 10 de diciembre de 2013. Colpensiones por medio de la Resolución GNR 261146 de 27 de agosto de 2015, le concedió la pensión de invalidez, a partir del 25 de julio del mismo año, en cuantía de \$644.350. Aduce que mediante derecho de petición solicitó ante Colpensiones el retroactivo pensional adeudado e intereses de mora sin recibir respuesta.

En sentencia proferida el 13 de septiembre de 2018, el Juzgado Décimo Laboral del Circuito de Medellín absolvió a la Administradora Colombiana de Pensiones – Colpensiones de las pretensiones de la demanda, y se abstuvo de imponer costas procesales.

ALEGATOS DE CONCLUSIÓN

La apoderada de Colpensiones dentro del término legal allegó escrito de alegatos de conclusión, solicitando se confirme la decisión absolutoria de primera instancia, toda vez que el disfrute de la pensión de invalidez se encuentra regulado en el artículo 10 del Decreto 758 de 1990, que dispone que el retroactivo pensional se reconoce desde la fecha de estructuración, sin embargo, si existiese subsidio por incapacidad, la prestación se pagará a partir del día siguiente de la expiración del subsidio. Agrega que en el caso del actor se encuentra en el expediente administrativo certificado de incapacidades emitido por SALUDCOOP EPS hoy CAFESALUD, donde se establece como última incapacidad el 24 de julio de 2015, por lo que la pensión de invalidez se reconoció desde el día siguiente.

PROBLEMA JURÍDICO

El problema jurídico de esta segunda instancia, consiste en determinar si al demandante le asiste el derecho al reconocimiento y pago del retroactivo pensional causado desde el 10 de diciembre de 2013, intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 e indexación.

CONSIDERACIÓN PRELIMINAR

Examinada en conjunto la prueba documental que reposa en el expediente, la Sala encuentra:

1. Que conforme dictamen médico No. 201588963KK de 15 de febrero de 2015, emitido por Colpensiones el señor Fabian de Jesús Acevedo Grajales presenta una pérdida de capacidad laboral del 66.3% de origen común, estructurada el 10 de diciembre de 2013.
2. Que el accionante el 12 de marzo de 2015, le reclamó administrativamente a Colpensiones, la pensión de invalidez y esta entidad mediante la Resolución GNR 261146 de 27 de agosto de 2015 se la concedió con

fundamento en los artículos 38 de la Ley 100 de 1993 y 1° de la Ley 860 de 2003, a partir del 25 de julio de 2015, en cuantía de \$644.350, prestación que se ingresaría en la nómina de septiembre de 2015, pagadera en el mes siguiente. En el acto administrativo referido se indicó que fue allegado certificado expedido por SaludCoop EPS *“...en el cual se verifica claramente que la última incapacidad fue cubierta hasta el 24 de julio de 2015, por lo anterior y dando cabal cumplimiento a la Circular 01 de 2012 mencionada se procede a dar la efectividad de dicha prestación a partir de la fecha de la última incapacidad...”*.

3. Que frente a la Resolución citada, el actor interpuso recurso de reposición, mismo que fue desatado en la Resolución GNR 357571 de 12 de noviembre de 2015 confirmando lo resuelto.
4. Que el 28 de marzo de 2016, el accionante solicitó el retroactivo de la pensión de invalidez, el cual le fue negado en la Resolución GNR 121250 de 26 de abril de 2016 aduciendo que *“... revisado el expediente administrativo como el aplicativo SAMI – Sistema de Auditoria Médica Integral, se evidencia certificado de incapacidades por SALUDCOOP EPS hoy CAFESALUD, en donde se establece como última incapacidad el 24 de julio de 2015...”*. Que siendo así, la Resolución GNR 261146 de 27 de agosto de 2015, se reconoció conforme a derecho.
5. Que SaludCoop EPS le pagó al demandante 165 días de incapacidades continuas hasta el 24 de julio de 2015.

CONSIDERACIONES

DEL RETROACTIVO PENSIONAL

El artículo 10 del Decreto 758 de 1990 consagra lo siguiente:

“...Artículo 10. Disfrute de da pensión de invalidez por riesgo común. La pensión de invalidez por riesgo común, se reconocerá a solicitud de parte interesada y comenzará a pagarse en forma periódica y mensual desde la

fecha en que se estructure tal estado. Cuando el beneficiario estuviere en goce de subsidio por incapacidad temporal, el pago de la pensión de invalidez comenzará a cubrirse al expirar el derecho al mencionado subsidio.

La pensión de invalidez por riesgo común, se otorgará por períodos bienales, previo examen médico - laboral del ISS, al que el beneficiario deberá someterse en forma obligatoria, con el fin de que se pueda establecer que subsisten las condiciones que determinaron su otorgamiento.

La pensión de invalidez se convertirá en pensión de vejez, a partir del cumplimiento de la edad mínima fijada para adquirir este derecho...”.

Como este aspecto no fue regulado expresamente en la Ley 100 de 1993, resulta razonable su aplicación en virtud de lo previsto en el artículo de dicha Ley, que permite acudir a la normatividad anterior del I.S.S.

Igualmente, el artículo 3° del Decreto 917 de 1999 dispone:

“...Artículo 3. Fecha de estructuración o declaratoria de la pérdida de la capacidad laboral. Es la fecha en que se genera en el individuo una pérdida en su capacidad laboral en forma permanente y definitiva. Para cualquier contingencia, esta fecha debe documentarse con la historia clínica, los exámenes clínicos y de ayuda diagnóstica, y puede ser anterior o corresponder a la fecha de calificación. En todo caso, mientras dicha persona reciba subsidio por incapacidad temporal, no habrá lugar a percibir las prestaciones derivadas de la invalidez...”.

De ésta manera, se ha podido concluir, que si bien en principio la fecha de la estructuración de la invalidez es la que determina la causación del derecho a la pensión, las mesadas pensionales solo podrán reconocerse por aquellos períodos en los que no se hubiere recibido por parte del afiliado algún subsidio por incapacidad temporal, ya sea por la EPS o por la entidad de pensiones, pues con

aquellos dineros recibidos como incapacidad, el afiliado logra cubrir sus necesidades básicas y elementales para su auto subsistencia, de manera que carecería de respaldo fáctico reconocerle las mesadas pensionales que reclama por el mismo lapso y con fundamento en el mismo hecho, en tanto ambas llevan implícitas una misma finalidad económica.

Sin embargo, aunque en otras oportunidades se ha ordenado el pago de la pensión desde la fecha de estructuración, habiendo aún subsidios por incapacidad reconocidos y pagados, los cuales simplemente se descontaban, dicho criterio ha sido cambiado recientemente por nuestro órgano judicial de cierre, según sentencia SL 5170 del 20 de octubre de 2021, radicado 88003, en la que la Sala de Casación Laboral de la Honorable Corte Suprema de Justicia sostuvo lo siguiente:

“...Así, en la incapacidad temporal el subsidio se paga a partir de la aparición del hecho causante, que lo es la enfermedad o lesión que le impide desempeñar la labor por un tiempo determinado, hasta que otro hecho causante introduce una nueva situación protegida en lugar de la anterior, como cuando se declara que las lesiones se convierten en definitivas, de tal manera que los efectos económicos de la pensión de invalidez, en los supuestos en los que su declaratoria esté precedida de una incapacidad temporal, se producen a partir de la extinción de la última incapacidad y, sino lo está, se producen a partir de la fecha de estructuración del estado de invalidez.

(...) el eje central de delimitación está en el momento en que se califica el estado de invalidez, quedando a partir de allí extinguida la incapacidad temporal, pero limitándose la retroactividad de la nueva prestación al momento en que se efectuó el último pago de la prestación que la antecede, dado el carácter secuencial de la acción protectora de la seguridad social, donde los efectos económicos de las prestaciones no siempre coinciden con el hecho causante en sentido material, pues la previsión legal es muy clara en relacionar la fecha inicial de la prestación por invalidez con la fecha de finalización formal de la incapacidad temporal.

(...)

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en líneas precedentes, la Sala considera necesario

precisar su doctrina, en el sentido de señalar que cuando existen subsidios por incapacidad temporal, continuos o discontinuos, con posterioridad a la fecha de estructuración del estado de invalidez, las mesadas pensionales se comenzarán a pagar sólo a partir del momento en que expire el derecho a la última incapacidad, postura con la cual queda rectificada y delineada su posición con relación a criterios anteriores que le hubieren sido contrarios (SL1562-2019).”.

La certificación de incapacidades expedida por SaludCoop EPS que milita en el expediente administrativo, prueba que al señor Fabián de Jesús Acevedo Grajales le fueron expedidas y pagadas incapacidades durante 165 días continuos hasta el 24 de julio de 2015.

En consecuencia, atendiendo al reciente criterio jurisprudencial, al estar acreditados los pagos por subsidio por incapacidad hasta el 24 de julio de 2015, no resulta procedente reconocer la pensión de invalidez de origen común desde el 10 de diciembre de 2013, fecha de estructuración de la invalidez, como se pretende.

Esta Sala acogiendo el precedente vertical, ha variado el criterio en el sentido antes indicado.

Así las cosas, se confirmará la decisión absolutoria de primera instancia que se revisa en consulta.

Sin **COSTAS** en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la **SALA PRIMERA DE DECISIÓN LABORAL** del **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN**, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley, resuelve:

PRIMERO: Confirmar la decisión de primera instancia que se revisa en consulta por las razones expuestas.

SEGUNDO: Sin costas en esta instancia.

Lo resuelto se notifica en **EDICTO**. Se ordena regresar el proceso al Juzgado de origen.

Los Magistrados,

Jaime Alberto Aristizábal Gómez

John Jairo Acosta Pérez

Francisco Arango Torres

Firmado Por:

Jaime Alberto Aristizabal Gomez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

John Jairo Acosta Perez
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Francisco Arango Torres
Magistrado
Sala Laboral
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **b25b509026edcf89e62e2808cf70a621f258ebaa51ab7fc630268d7cb6f468ee**

Documento generado en 04/08/2022 01:01:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>